



RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACION CON LA CONTROVERSIA DERIVADA DEL DICTAMEN NUMERO DIC/CRAF-012/03, DE LA COMISION REVISORA PERMANENTE DE LA APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, RELACIONADO CON EL INFORME JUSTIFICATORIO PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ACREDITADO ANTE ESTE ORGANO CENTRAL, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO O GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL AÑO DOS MIL DOS

Heroica Puebla de Zaragoza, a veintiséis de marzo de dos mil tres.

VISTOS, para resolver en definitiva los autos que integran el expediente formado con motivo de la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-012/03, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, en relación con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos, y:

R E S U L T A N D O

I.- Que, este Organo Central durante el desarrollo de la sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio del año próximo pasado aprobó el Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

II.- Que, la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil tres aprobó el dictamen número DIC/CRAF-012/03, relativo al informe justificatorio presentado por el Partido Acción Nacional, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos.

En el referido documento la Comisión revisora dictaminó en lo conducente lo siguiente:



“ . . .

III.- Que, en atención a todo lo anterior, esta Comisión Permanente analizará, de manera exhaustiva, el cumplimiento, por parte del citado Partido Político, de los extremos que establece el artículo 19 de los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, mismo que en forma textual dice: *“Los informes justificatorios por concepto de gastos de campaña, deberán ser presentados a más tardar dentro de los setenta y cinco días siguientes, contados a partir en que concluyan las campañas. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones en que hayan participado los partidos políticos, especificando los gastos que el partido y el candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse:*

- a) *Tantos informes como candidatos a diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa hayan registrado ante las autoridades electorales.*
- b) *Tantos informes como candidatos a miembros de ayuntamientos hayan registrado ante las autoridades electorales”.*

Es decir, relacionando tal artículo 19 de los mencionados *Lineamientos*, con el diverso 52, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se aprecia, por parte de esta Comisión Revisora, que los Partidos Políticos deberían presentar el informe justificatorio respectivo, acompañados del sustento documental correspondiente.

Por lo que respecta a los informes referidos en el inciso b) anterior, el Partido Acción Nacional presentó el informe justificatorio, con su sustento documental, de la campaña de sus candidatos a miembros del ayuntamiento de Molcaxac, Puebla; toda vez que el referido Partido Político registró planilla de candidatos a miembros del referido municipio.

Lo anterior, tal como consta en los archivos de este Instituto, documentales que, en términos de los artículos 358, fracción II, y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, hacen prueba plena, toda vez que no fueron objetadas.

De esta manera, la Comisión Revisora cuenta con los instrumentos jurídicos para determinar, si en dicho informe, existen inconsistencias o irregularidades, que deban ser observadas, en su caso.

Además, se analizará la documentación correspondiente, y que acompañó, en su momento, el referido Partido Político al mencionado informe justificatorio; esto es, no sólo se analizará ese informe, sino también el sustento documental respectivo.

Máxime, que en cumplimiento de sus atribuciones, esta Comisión Permanente, debe observar los principios rectores a que se refiere el artículo 8 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y que a la letra dice: *“En el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán principios rectores, la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, debiéndose entender por:*

I.- Legalidad.- Adecuación estricta a la ley de todas las actuaciones de las autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos;

II.- Imparcialidad.- Actuación neutral de quienes desarrollan la función estatal de organizar las elecciones, sin beneficiar ni perjudicar a alguna de las partes en la contienda electoral;

III.- Objetividad.- Desarrollar las actividades electorales tomando como base la realidad única, sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga de ella;

IV.- Certeza.- Realizar la función electoral con estricto apego a los hechos y en la realidad única, a fin de que sean fidedignos, confiables y verificables; y

V.- Independencia.- La capacidad irrestricta del Instituto para cumplir con la función encomendada por sí solo, sin intervención alguna de los órganos del poder público.”

“ . . .

V.- Que, en el caso concreto, como ya se dijo, no se tiene conocimiento de que el Partido Acción Nacional, haya obtenido, como fuente de financiamiento, transferencia de su Comité Ejecutivo Nacional, para la campaña en comento, de ahí que no se haga mayor consideración al respecto.

“ . . .

VII.- Que, en atención al considerando anterior, se debe tomar en cuenta al artículo 77 de los citados *Lineamientos*, el cual señala que *“una vez recibido el informe a que hace mención el artículo anterior, la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento procederá a realizar un dictamen que deberá contener por lo menos los siguientes puntos:”*

- “a).- Los procedimientos y formas de revisión aplicados.”*



Por lo que respecta a este inciso, debe decirse que los procedimientos y formas de revisión aplicados, consistieron en el examen de las operaciones financieras, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que fueron necesarias para efectuar la vigilancia de los recursos financieros, en estricto apego a lo establecido en los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, y en aplicación a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, Normas de Auditoría y Leyes Fiscales vigentes, permitiendo obtener una seguridad razonable del empleo de los recursos con que contó el Partido Político en mención.

Es decir, se utilizaron técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, las cuales consistieron en el estudio general de las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para concluir si era necesario profundizar en su estudio; asimismo se aplicó el análisis de las cuentas de los estados financieros, así como la verificación aritmética de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas, y por último la verificación física de que el sustento documental correspondiente reuniera los requisitos legales respectivos.

El inciso b), del mencionado artículo 77, dispone:

“b).- El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes por actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación social y el informe de campaña presentados por cada partido político, y de la documentación comprobatoria correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones que haya presentado cada partido político después de haber sido notificado con ese fin y la valoración correspondiente;”

Sobre este punto, cabe advertir que el presente dictamen únicamente se ocupa del rubro relativo a la obtención del voto o gastos de campaña, y en opinión de quien esto dictamina, el informe justificatorio y el sustento documental presentados por el Partido Acción Nacional, con relación al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, de la elección extraordinaria en Molcaxac, Puebla, previo análisis de los mismos, presentaron observaciones mismas que, en su momento, y como se manifestó en el capítulo de antecedentes de este dictamen, le fueron notificadas al referido Instituto Político y su valoración se fue haciendo, paulatinamente, conforme se presentaron las aclaraciones, por parte del instituto político, en su caso.

Finalmente, el inciso c), del artículo 77, de los citados *Lineamientos*, establece:

“c).- En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o generadas con motivo de la revisión.”

Sobre este último inciso, debe señalarse que la existencia de errores u omisiones técnicas determinadas en la revisión que realizaron la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, de este organismo, y esta Comisión Revisora, a la documentación, no fueron cumplimentadas por el Instituto Político en cuestión, tal como se advierte de la documentación correspondiente.

Esto es, únicamente, es de observarse que el Partido Acción Nacional incumplió con lo dispuesto por el artículo 19 de los *Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado*, ya que, tomando en consideración los plazos correspondientes, dicho Partido Político presentó, extemporáneamente, ante este Instituto, el diez de enero en curso, el informe sobre los gastos que erogó, para la campaña correspondiente, al proceso electoral extraordinario dos mil dos; lo anterior es así, porque el plazo para presentar dichos informes, feneció el nueve de septiembre de dos mil dos.

En virtud de todo lo anterior, y una vez analizados el informe y demás documentación que obra en los expedientes respectivos, esta Comisión Permanente considera que existe una observación por lo que respecta a la presentación fuera de los plazos establecidos del informe justificatorio, por parte del Partido Acción Nacional, respecto al rubro de gastos de campaña u obtención del voto, que erogó dicho instituto político, en la elección local extraordinaria 2002.

...

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, fracción IV, del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos:



D I C T A M I N A

PRIMERO.- Esta Comisión Revisora es competente para conocer y emitir opinión sobre el presente asunto, en términos de los considerandos I y II, de este dictamen.

SEGUNDO.- Este órgano del Consejo General determina que existe una observación por lo que respecta a la presentación fuera de los plazos establecidos del informe justificatorio, presentado por el Partido Acción Nacional, únicamente por lo que respecta al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, de la elección extraordinaria efectuada en Molcaxac, Puebla, en el año dos mil dos, en términos de los considerandos III, V y VII del presente dictamen.

... ”

III.- Que, mediante memorándum número IEE/CRAF-030/03 de fecha veintiocho de febrero de dos mil tres, recibido en la oficina de la Presidencia en esa fecha, el Consejero Electoral Presidente de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, Licenciado José Manuel Rodoreda Artasánchez, remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado el dictamen materia de este fallo.

IV.- Que, el Secretario General del Organismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Proceso Administrativo señalado en el punto I de Resultando, mediante oficio número IEE/SG-031/03 de fecha trece de veintiocho de febrero del año en curso corrió traslado al Partido Acción Nacional, con el dictamen número DIC/CRAF-012/03, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, con relación a los informes presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos, con la finalidad de que en el término de diez días posteriores a aquel en el que se efectuó la notificación contestara lo que a su interés conviniera, aportando las pruebas necesarias para acreditar su dicho, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría contestando el mencionado dictamen en sentido negativo.

La notificación en comento se efectuó el veintiocho de febrero del mencionado año, a las doce horas con veinticinco minutos, según consta en la razón correspondiente.

V.- Que, el catorce de marzo del año en curso, Partido Acción Nacional, por conducto de su Representante Suplente acreditado ante el Consejo General del Organismo, Licenciado Rafael Guzmán Hernández presentó en la Oficialía de Partes del Organismo un escrito por el que dio contestación al dictamen número DIC/CRAF-012/03, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos.



En el referido escrito el partido político en comento argumentó textualmente lo siguiente:

“ . . .

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, 6 y 7 del Proceso Administrativo para la Resolución de las Controversias Derivadas de los Dictámenes de la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se determinaron que existen observaciones al Partido Político que represento respecto a lo que esta denomina "Informe Justificatorio relativo a los rubros a Actividades Tendientes a la Obtención del Voto o Gastos de Campaña, Respecto a la Elección Extraordinaria efectuada en Molcaxac, Puebla en el año Dos Mil Dos", Dictamen identificado bajo número de expediente DIC/CRAF-O12/03 emitido por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos, vengo a manifestar lo que al derecho e interés de mi representado conviene, lo que paso hacer al tenor de los siguientes:

ALEGATOS

I.- Respecto a lo señalado por la autoridad dictaminadora, en el considerando II tercer párrafo, señala en resumen -que resultan aplicables los “Lineamientos”-, reconociendo por otro lado -que no existe legislación específica, en materia de fiscalización, para regular /o relativo a elecciones extraordinarias-, aunque contradictoriamente concluye -que tienen aplicación, bajo la premisa de que los mismos no hacen distinción que sean exclusivos para campañas efectuadas dentro de un proceso electoral ordinario,” señalando que todo financiamiento público recibido por los partidos políticos, por su propia naturaleza tiene que ser fiscalizable-; es indudable que tal afirmación fortalece la incertidumbre jurídica, que existe por la falta de certeza jurídica que priva al no existir disposición clara, específica, expresa, general y abstracta, que obligue a su irrestricta observación y cumplimiento, respecto a la forma de regulación y cumplimiento de la obligación de informar en materia de fiscalización sobre recursos obtenidos y aplicados a los gastos de campaña, al caso concreto se reconoce la deficiente, nula e inexistente reglamentación al respecto, también es evidente que la reglamentación existente no hay disposición normativa alguna que determine la aplicación al caso concreto, por lo que, si bien es cierto no puede dejarse de revisarse o fiscalizarse el financiamiento también es cierto que la ley prevé que esto debe cumplirse conforme a una reglamentación adecuada, sin que se permita o implique que la existencia de una obligación y una facultad a la autoridad esta pueda aplicarla arbitrariamente puesto que no lo señala como una facultad discrecional, si no como una atribución y facultad que para ser eficaz tiene que ser reglamentada (artículo 51 párrafo primero y 52), la facultad y la obligación cuyo cumplimiento supeditado a la emisión de disposiciones ya sea en forma de lineamientos o reglamentos, la aplicación y alcance y cumplimiento queda constreñida al mecanismo o procedimientos establecido en el mismo, y no deberá encontrar sustento en interpretación unilateral, arbitraria o por mayoría de razón o simple analogía como lo pretende hacer la dictaminadora; es decir ante la nula existencia de una disposición legal que por ley necesita de regulación, no puede admitirse interpretación alguna, ya que no puede interpretarse lo que no existe, en tal caso se estará ante la decisión unilateral de dictar disposiciones sin agotar un mecanismo legal.

Es oportuno señalar que los Lineamientos y en especial la justificación que se maneja en la introducción a la aprobación y expedición de los mismos, señala y admite el Consejo General claramente que estos Lineamientos –resultan imprescindibles para las funciones y objetivos del nuevo Instituto Electoral del Estado de Puebla en materia de control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuentan los Partido Políticos para el proceso electoral estatal del 2001-, esto indudablemente encuentra sustento dentro del cuerpo de los lineamientos, ya que si observamos lo relativo a los informes de gastos de campaña solo contempla lo relativo a los informes justificatorios por este concepto, a los informes de candidatos a diputados al Congreso del Estado por el principio de Mayoría Relativa hayan registrado ante las autoridades electorales y como candidatos a miembros del Ayuntamiento hayan registrado ante las autoridades electorales, es decir, no contempla la elección de Gobernador y los gastos erogados por concepto de gastos de campaña por candidato a



Gobernador, por lo que efectivamente los lineamientos fueron creados con el objetivo de regular, controlar y vigilar (sic.) el origen y uso de todos los recursos de los Partidos Políticos exclusivamente para el proceso electoral 2001, por la razón lógica de que dicha elección solo fueron convocadas para la renovación del poder legislativo y miembros de los Ayuntamientos, por lo que se concluye que dichas disposiciones no son aplicables para los procesos electorales extraordinarios, de gobernador o distintos del proceso electoral dos mil uno proceso que finalizo con la última resolución recaída al último recurso de inconformidad interpuesto por los partidos políticos en contra de la elección o elecciones del año dos mil uno, siendo esto el día trece de febrero del año dos mil dos en sesión celebrada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hecho conocido que no hace necesaria su probanza, razón por lo que el proceso electoral extraordinario y por ende la campaña electoral de esta queda fuera de la reglamentación y regulación establecida en los Lineamientos como se ha demostrado.

Sin embargo, a pesar de que no pueden ser aplicables y obligatorias tales disposiciones, bien es cierto podrían servir de base dichas disposiciones para que la autoridad electoral hubiera podido cumplir con su función fiscalizadora, esto claro esta que siempre y cuando el Consejo General hubiera acordado al respecto y le hubiera dado el carácter mínimamente de observable cuando estableció los plazos y términos a que debieron sujetarse los partidos políticos en las elecciones extraordinarias e incluso tampoco se determino al respecto al otorgar financiamiento público a los partidos políticos que participarían en la misma tal como consta en el acuerdo del Consejo General que menciona la autoridad, es decir tanto la autoridad dictaminadora a quien le corresponde proponer lineamientos debió advertir la deficiencia y omisión al respecto, así como a este Consejo General que le corresponde aprobarlos, así como también le corresponde haber determinado las base, plazos y términos y no lo hicieron y tampoco lo corrigieron, por lo que hoy no se puede basarse en una simple apreciación unilateral para motivar y fundamentar, una obligación y mecanismo de revisión que no esta previsto y como he demostrado que el objetivo y alcance de los lineamientos previamente aprobados en materia de fiscalización delimita el alcance y límite de la atribución que pretende ejercitarse, no puede exigirse el cumplimiento de los plazos señalados y en específico en cuanto al termino para la presentación de informes justificatorios, porque como he manifestado no está establecido, tal y como la autoridad dictaminadora lo reconoce y como nosotros se lo señalamos al contestar el requerimiento de que presentáramos el informe respectivo, si bien es cierto que la presentación oportuna de los informes justificatorios es una obligación impuesta por disposición contenida en el código, también es cierto que por esta misma y para su cabal cumplimiento es importante que por lineamiento se especifique el tiempo, forma y mecanismo en que deberá realizarlo, es decir no basta al caso concreto que por ley lo establezca, como marca la autoridad dictaminadora porque la misma ley señala que debe dictarse disposiciones para su exacto y claro cumplimiento, en la que deberá desarrollarse su facultad para que se cumpla deberá contener disposiciones claras, precisas, abstractas y al caso concreto no existe tal disposición claramente señalada, lo que se traduce en falta de certeza legal y jurídica.

2.- Aunque resulta intrascendente señalar que no es aplicable el fundamento 54 fracción XI del código de la materia, consideró necesario precisar el porque. El envío de información y soporte documental que hace el partido político es en cumplimiento a las disposiciones del capítulo 51, 52, y 53 del código y en consecuencia tendría que haber sido de los lineamientos que este había previamente emitido, por lo que no es factible lo mencionado por la autoridad dictaminadora de que la base y fundamento que hemos señalado como inaplicable, porque la base de los lineamientos no se estaba obligado a informar a esta sobre financiamiento régimen de topes de gastos de campaña y origen y montos totales de los recursos, porque no lo contemplan los lineamientos y el mencionado artículo, 54 fracción XI claramente no le concede tal facultad a la Comisión Revisora, si no al Consejo general y este no acordado delegar tal facultad a la misma, pues hay que recordar que los lineamientos se emitieron para que la Comisión Revisora cumpla con la facultad establecida en los artículos 51,52 y 53 que es claramente delimitada y el 54 fracción XI trata simplemente de un dispositivo legal que marca obligaciones que debe cumplir los partidos políticos ante una autoridad distinta de la dictaminadora, indistintamente a las atribuciones de la Comisión Revisora que le otorga el código. Bastaría que con dicho fundamento la Comisión Revisora tenga la facultad de requerir información sobre el proceso de selección de candidatos.



3.- Es inaceptable e impreciso que la autoridad local señale que existen fuentes de financiamiento para ser objeto de fiscalización, cuando la ley solo se refiere a un régimen de financiamiento y sus tipos están perfectamente definidos, para efectos de establecer como fuente de financiamiento los recursos por transferencias federales, cuando el código claramente establece cual es el régimen de financiamiento.

4.- Es impreciso la dictaminadora al querer adjudicarse una atribución que no tiene conferida como lo es el determinar los topes de gastos de campaña y determinar si estos fueron o no fueron rebasados.

5.- El considerando III del dictamen queda también sin sustento, aunque la autoridad trata de remediar su omisión y er error de haber propuesto al Consejo General para su aprobación, unos "Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado" que solo tienen por objeto fiscalizar los recursos en cuanto a su origen y aplicación y que hayan sido destinados a las campañas electorales del proceso electoral del año dos mil uno, de ahí que la interpretación que pretende darle al artículo 19 de los lineamientos a LATU SENSU y con relación con el artículo 52 del código local de la materia electoral, no tiene otra finalidad más que tratar de fundar su actuación con vagos argumentos e interpretaciones fuera de lugar que contravienen el espíritu de las disposiciones legales y del reglamento administrativo propuesta por esta.

6.- En el considerando sexto la autoridad dictaminadora señala que con los diversos 51,52, 53 y demás relativos del Código de la materia, está comisión Permanente, tiene la atribución de revisar el informe y el sustento documental; efectivamente pero para desarrollar o llevar a cabo tal facultad y el partido político para cumplir con dichas obligaciones, ambos deben sujetarse a los lineamientos previamente aprobados por el Consejo- General, tal como lo precisan los mismos fundamentos legales señalados, de modo que esto solo se podrá efectuar sí solo si en los lineamientos existen disposiciones claras y precisas que determinen claramente los mecanismos, formatos, procedimientos y plazos, de ahí que si el lineamiento no es efectivo no podrán cumplir tanto los actores con sus obligaciones como' la autoridad con sus atribuciones.

7.- En el considerando VII, la responsable vuelve otra vez a insistir en aplicar a raja tabla los lineamientos y específica mente el artículo 77 para efectos de la realización del dictamen y con ello para la determinación de las observaciones; lineamientos que como hemos dicho no pueden ser aplicados para la revisión de gastos de campaña de un proceso distinto al proceso electoral del año dos mil uno, tomo lo consigna esta autoridad al emitir el acuerdo que aprueba los Lineamientos y como lo reconoce en el mismo dictamen. Sin embargo y para mejor proveer es necesario señalar que en el inciso c) del apartado del considerado controvertido que habla sobre los puntos que debe contener un dictamen señala que en cuanto los errores o irregularidades encontradas o generadas con motivo de la revisión, manifiesta que se basa en un informe de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del cual no se nos corre copia para su debida imposición, así ellos dicen que se advierten errores a la documentación y que las misma no fueron cumplimentadas, en este aspecto vale la pena señalar que nunca nos fueron notificada tales omisiones y errores, y no fuimos requeridos para aclarar o rectificar los datos o exponer lo que considerábamos conveniente, razón por lo que se señala que es violatorio de garantías y que nos deja en estado de indefensión, pues nunca se nos notifico o hizo del conocimiento de tales errores y omisiones y con esto se nos haya respetado el derecho de audiencia y replica. Por lo cual su afirmación anteriormente controvertida y su determinación de que únicamente es de observarse que el Partido Acción Nacional, tomando en cuenta los plazos, (que no especifica, y no señala cuando comienzan y cuando acaban) concluye que presentó extemporáneamente el informe de gastos de campaña correspondientes al proceso electoral extraordinario dos mil dos, porque a decir de esta el plazo feneció el nueve de septiembre de 2002 y este fue presentado el 10 de enero; sin mencionar y justificar el porque tal fecha de inicio y de termino y tampoco señalar los fundamentos y la forma de contabilizar estos plazos, por lo que su determinación es improcedente sobre la observación de haber presentado fuera de los plazos establecidos, este acto no carece de la más elemental motivación sustento y fundamentación legal.



8- Que de lo señalado en el considerando VIII, al no existir disposición reglamentaria expresa sobre la obligación y plazo de presentación, procedimiento de realizar informes justificatorios de gastos de campaña sobre procesos electorales extraordinarios, por ende tampoco hay un procedimiento señalado o hay indicativa sobre cual deba ajustarse, tampoco existe la posibilidad de emitir un dictamen al respecto, independientemente de que exista la facultad legal, pero no existe la disposición reglamentaria y nunca se proveyó al respecto, por lo que no tiene validez y eficacia legal lo actuado y determinado por la autoridad dictaminadora que debió presentarse en determinado plazo tal informe justificatorio, por lo que los considerandos de la resolución son infundado e improcedentes, ya que nunca se normo tal procedimiento y no puede admitirse se norme por los Lineamientos existentes por que son omisos y vagos al respecto.

Por lo anterior se concluye que no existe incumplimiento a ninguna disposición tanto de los lineamientos como legal, y en apego a los principios de certeza, objetividad y legalidad la autoridad dictaminadora debió señalar que no existen observaciones, por lo que el Dictamen hoy combatido se reputa como ilegal y con falta de certeza por lo cual debe declararse improcedente por infundado e inmotivado.

Es por ello que ante todo lo anterior lo procedente es señalar que es improcedente el dictamen y sus consideraciones y por consecuencia las observaciones que determina, por lo que este Consejo General deberá ordenar el archivo del presente dictamen como asunto concluido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma por medio del presente escrito y ofreciendo los alegatos que del mismo se desprenden y que he referido en los puntos de alegatos de este documento, manifestando lo que al interés y derecho conviene de mi representado, contestando y contraviniendo la observación que del Dictamen elaborado por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos, con relación al informe justificatorio presentados por el Partido Acción Nacional a solicitud de la Comisión Revisora y denominado por la misma autoridad bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, respecto a la elección extraordinaria de Molcaxac del año dos mil dos.

SEGUNDO.- En su oportunidad acordar como improcedente e infundado el Dictamen y la observación señalada por la Comisión Revisora, declarando el asunto como total y absolutamente concluido.

...”

VI.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios, el Secretario General del Organismo procedió a integrar el expediente relativo a la controversia materia del dictamen DIC/CRAF-012/03.

Lo anterior, con la finalidad de estudiar de manera integral las constancias que componen dicho expediente y estar en posibilidad de resolver el presente asunto con estricto apego a los principios de certeza y exhaustividad.

VII.- Que, una vez que se efectuó el estudio correspondiente y en atención a que los presentes autos se encuentran en estado de ser



resueltos, se somete al conocimiento del Pleno del Consejo General del Organismo el presente proyecto de resolución, en los términos que a continuación se plantean.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que, el Consejo General del Organismo es competente para conocer y resolver la presente controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-012/03 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 53, 89 fracción XX del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 1 y 8 del Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

2.- Que, en atención a lo dispuesto por los artículos 42 fracciones I y IV y 80 fracción IV del Código de la materia y el diverso 3 del Proceso Administrativo en comento, el Consejo General de esta Organismo Electoral reconoce la personería del Partido Acción Nacional, promoviendo por conducto de su Representante Suplente acreditado ante este Organo Central, Licenciado Rafael Guzmán Hernández.

3.- Que, observando el principio de exhaustividad al que deben apegarse todas las resoluciones emitidas por las autoridades electorales tal y como lo establece la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: *“EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”*, este Organo Central debe determinar si el dictamen de la Comisión Revisora del Financiamiento de los partidos políticos materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado.

Con la finalidad de garantizar el estudio exhaustivo del asunto materia de esta resolución, el Consejo General del Organismo considera necesario establecer el método que utilizará para analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente relativo, por lo que con la finalidad de dar certeza al mencionado análisis se estudiará en primer lugar el dictamen elaborado por la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, junto con sus anexos; posteriormente se estudiará el escrito de constatación presentado por el Partido Acción Nacional, así como las pruebas, que en su caso aporte u ofrezca el Instituto Político para justificar su dicho y por último los



demás elementos que se integraron al expediente y que se relacionan con la revisión de los informes justificatorios presentados, esto con la finalidad de poder relacionar todos y cada uno de los elementos que integran el expediente y contar con los datos que permitan determinar con certeza si el dictamen materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado y en consecuencia en procedente aprobarlo en sus términos.

Las disposiciones legales aplicables para el estudio que realizará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado son:

A. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla;

B. Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado;

C.- Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios; y

D. Acuerdo número CG/AC-048/02, por el que establece el criterio de interpretación del artículo 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla aprobado por el Consejo General del Organismo en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

4.- Que, tal y como se estableció en el considerando anterior, los preceptos legales en los que se fundará esta resolución son la Constitución Política del Estado, el Código de la materia, los Lineamientos Generales de Fiscalización y el contenido del acuerdo número CG/AC-048/02, aprobado en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

En este orden de ideas, el Consejo General del Organismo, en atención a que la presente resolución tiene como finalidad determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos de los partidos políticos y en caso de que así se acredite comunicar dicha determinación al Tribunal Electoral del Estado para que en términos del Código aplicable sancione al instituto político que se encuentre en dicho supuesto, considera que resulta necesario determinar en primer lugar cuál es el objetivo que persigue la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, para estar en posibilidad de determinar si los errores u omisiones en el manejo de los recursos en comento constituyen una violación a dicho fin superior.



Se considera que al establecer un marco de referencia que basado en la doctrina del derecho electoral y en la jurisprudencia que sobre el tema ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permita dilucidar cuál es el fin y la naturaleza de la figura del financiamiento de los partidos políticos en el sistema electoral mexicano, será más sencillo determinar el objetivo que persigue el control y vigilancia de dichos recursos.

En este sentido el jurista Javier Patiño Camarena al referirse al financiamiento de los partidos políticos, cita la afirmación expresada por Arturo Sánchez Gutiérrez, en el sentido de que existe una estrecha relación entre la cantidad de recursos con que cuenta un partido para sus actividades y campañas electorales y el efecto que puede generar en los electores, en los últimos años en los regímenes democráticos contemporáneos ha adquirido importancia creciente la regulación de los recursos económicos de que disponen los partidos. (“El régimen de los partidos políticos y las condiciones de competencia electoral”, intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres).¹

Además, Patiño Camarena establece, de manera general que existen dos vías de financiamiento, la pública y la privada. El financiamiento público obedece al propósito de garantizar la independencia de los partidos políticos frente a los grupos económicos y al deseo de establecer ciertas condiciones de competencia igualitaria en la contienda electoral, es decir, este tipo de financiamiento fue una respuesta al desequilibrio de las condiciones de competencia partidaria, pues al ser el Estado el principal financiero, los partidos podrían estar en condiciones de cumplir sus funciones como instituciones representantes de la sociedad, con independencia de grupos de presión económica y avocados completamente a la actividad política.²

Por último, el mencionado jurista al citar a la investigadora María de la Luz Mijangos, señala que el financiamiento público favorece, en primer término la independencia de los partidos de los grandes capitales y se evita que la contienda electoral se vuelva censataria; asimismo considera que este tipo de financiamiento favorece la igualdad de trato en su otorgamiento y la transparencia en la asignación de recursos (Intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres)³

¹ Patiño Camarena, Javier. *Nuevo Derecho Electoral Mexicano*. Ed. Constitucionalista e IFE. Quinta Edición. México D.F., 1999. Pág. 339.

² Ibidem.

³ Ibidem.



Con respecto a los criterios de jurisprudencia emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe decirse que en las distintas Tesis sustentadas por dicho Tribunal toman como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, necesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias.⁴

En este orden de ideas, se puede concluir que la regulación del financiamiento en el derecho electoral mexicano tiene como finalidad:

- A.- Asegurar la independencia financiera de los partidos políticos, protegiéndolos de los grupos económicos poderosos;
- B.- Establecer condiciones para asegurar la igualdad de condiciones en la contienda electoral;
- C.- Desde el punto de vista de la equidad en la contienda regular el monto del financiamiento privado, sin que esto signifique la desvinculación de los partidos con sus militantes, afiliados o simpatizantes.

Visto lo anterior, se puede determinar de manera general que la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos tienen como finalidad el vigilar que en la administración y aplicación de los recursos con los que cuentan estos institutos políticos garanticen la independencia financiera de los partidos políticos, la equidad en la contienda política, así como la transparencia en el ejercicio de los mencionados recursos, regulación que se da a través de disposiciones de carácter general, aprobadas con anterioridad a la revisión que establecerán los requisitos que deberán observarse, dando certeza a la misma.

Una vez que se pudo determinar de manera general el objetivo tanto de la figura del financiamiento público como de la fiscalización de la mencionada prerrogativa, corresponde ahora analizar las disposiciones legales que en la materia tienen vigencia en el Estado de Puebla, con la intención de poder determinar de manera precisa el fin que persigue la figura de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos.

El Capítulo V, del Título Segundo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, contempla lo relativo a la revisión y vigilancia del financiamiento de los partidos políticos

⁴ La Justicia Electoral en México y su Jurisprudencia. Disco compacto editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se consultó el contenido de las Tesis cuyos rubros son: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL y FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RECIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN UNA ELECCIÓN ANTERIOR QUE NO DEMOSTRARON CIERTA FUERZA ELECTORAL, RESPECTO A LOS DE RECIENTE CREACIÓN.



estableciendo en el artículo 51 que los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la administración de los recursos que por concepto de financiamiento reciban, así como de la presentación de informes justificatorios de su aplicación. Debe indicarse que al respecto la exposición de motivos del decreto que promulgó el mencionado ordenamiento legal establece que la finalidad de esta disposición es darle transparencia y limpieza a la comprobación del financiamiento.

El diverso 52 de dicho ordenamiento prevé la existencia de una Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los institutos políticos, con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos los informes justificatorios con sustento documental correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere para la legal administración de los recursos.

Los Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado establecen como objetivo alcanzar un mayor grado de eficiencia para el control y transparencia de los ingresos y egresos de los partidos políticos, con el objeto de garantizar que el financiamiento público se aplique correctamente en los rubros que corresponda, garantizándose el correcto uso de dichos recursos que provienen del erario público y respecto del financiamiento privado, que se obtenga en la forma y montos que establece la legislación de la materia.

En este orden de ideas, se puede concluir que el objeto de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos en el Estado de Puebla persigue los siguientes fines:

- A. Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos con los que cuentan los partidos políticos;
- B. Respecto del financiamiento privado, asegurar que su procedencia y monto se ajuste a lo previsto por la Legislación aplicable; y
- C. Asegurar condiciones de equidad en la contienda política.

Por lo anterior, se considera que los partidos políticos que aún y cuando rindieron sus informes justificatorios con sustento documental ante la Autoridad Electoral Administrativa, presenten inconsistencias u omisiones derivadas de errores involuntarios propios de la naturaleza humana, o bien imputables a terceras personas que han sido ajenas a la estructura que dentro de dichos Institutos es la encargada de la administración de esos recursos, siempre y cuando en lo general se hubiesen observado los requisitos formales que como marco de la actividad de fiscalización se establecen en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en tanto la justificación de los recursos sea fehaciente, sin dejar de considerar la



violación a la norma correspondiente, sí cumple con el objetivo de la revisión motivo del presente.

5.- Que, en ese orden de ideas, debe decirse que después de estudiar el dictamen en comento, se determinó que:

A. El mencionado Organo Auxiliar del Consejo General consideró que existían observaciones en el informe justificatorio del Partido Acción Nacional relativos al rubro de financiamiento determinado como actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos, en atención a que:

El mencionado Instituto Político presentó de manera extemporánea el informe justificatorio correspondiente, por lo que vulneró lo dispuesto por el artículo 19 de los Lineamientos Generales de Fiscalización.

B. Por su parte, el Partido Acción Nacional alegó en su defensa en el escrito presentado por su representante propietario acreditado ante este Organo Central que:

a. La propia Comisión Revisora estableció en el considerando II del dictamen materia de este fallo que no existía reglamentación específica para regular lo relativo a la fiscalización de los recursos ejercidos en procesos electorales extraordinarios, por lo que no es legal que se apliquen en la mencionada revisión dicho Ordenamiento, pues fortalece la incertidumbre jurídica que existe por la falta de certeza jurídica que priva al no existir disposición clara, específica, expresa, general y abstracta.

b. El Partido Acción Nacional informó sobre las erogaciones que efectuó en el proceso electoral extraordinario dos mil dos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Código de la materia, no de las disposiciones contenidas en los Lineamientos Generales de Fiscalización, pues como se mencionó los mismos no tienen aplicación al caso concreto.

c. Es inaplicable e impreciso señalar que existen fuentes de financiamiento, cuando la Ley se refiere a un régimen de financiamiento y sus tipos están perfectamente definidos.

d. No es procedente la observación efectuada por la Comisión Revisora, en atención a que los Lineamientos en comento no son aplicables para la revisión de los gastos efectuados bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos.



Para comenzar con el estudio integral de todas las constancias que integran el expediente que se resuelve con este fallo, este Organo Central estima que se debe tener en consideración lo siguiente:

Los Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, establecen de manera clara y ordenada el proceso de revisión al que deben someterse los informes justificatorios; así como el procedimiento que deben ejecutar tanto la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación como la Comisión Revisora, para determinar si la aplicación del financiamiento se efectuó de acuerdo a las disposiciones aplicables o bien existen observaciones en el manejo de los recursos con que cuentan los Partidos Políticos para desarrollar sus actividades.

Visto lo anterior y en atención a que la revisión de los informes justificatorios que en este caso se relacionan con la comprobación del financiamiento contemplado bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos es un proceso que se compone por una serie de momentos procesales perfectamente determinados por el Lineamiento para la Fiscalización que se ha venido citando, mismo que contempla desde la determinación del plazo para la presentación de los informes justificatorios; el establecimiento de Organos de Administración al interior de los Partidos Políticos; la definición de cada uno de los rubros de financiamiento al que pueden acceder los mencionados institutos políticos; la forma de justificar las erogaciones efectuadas por ellos; las instancias de revisión de la aplicación del mismo; así como el procedimiento para subsanar los errores, omisiones u observaciones que se detecten en la revisión, se demuestra que el diseño del régimen de fiscalización al que se encuentran sometidos los partidos políticos acreditados ante este Organo Central tiene como finalidad garantizar que las revisiones que en esta materia efectúe el Organo Auxiliar del Organo Superior de Dirección facultado para ello se efectúen respetando la garantía de audiencia de los partidos, así como los principios que rigen la función electoral.

Este Organo Central considera que no le asiste la razón al Partido Político observado, en los argumentos expresados en su defensa, ya que los Lineamientos Generales para la Fiscalización a los que se ha hecho referencia, son precisamente la reglamentación de carácter general, específica y abstracta que regula el proceso de revisión de la prerrogativa del financiamiento público en todas las modalidades que reconoce el Código de la materia.

Además, debe señalarse que a juicio de este Organo Central el hecho de que el ejercicio del rubro de financiamiento que fiscalizó la



Comisión Revisora se hubiese dado en el desarrollo de una elección extraordinaria, de ningún modo determina la inaplicación de los Lineamientos, ya que lo que se va a fiscalizar es el ejercicio de financiamiento público otorgado bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gasto de campaña y ese Ordenamiento contempla las disposiciones aplicables a la revisión de dicha prerrogativa.

La determinación del plazo para rendir los informes justificatorios de la aplicación del financiamiento público otorgado bajo el rubro del que se ocupó el dictamen materia de este fallo, surge con motivo de un supuesto y al reunirse los elementos de la hipótesis surjan las consecuencias y en caso de la fijación del plazo en el supuesto del artículo 19 de los Lineamientos de la materia, no constriñe a otra condición que la de la celebración de un proceso electoral, sin hacer diferencia alguna.

En consecuencia, resulta improcedente los argumento vertido por el Partido Político observado.

Una vez que este Organismo Central estudió y analizó todas y cada una de las constancias que integran el expediente formado a la controversia materia de esta resolución, se arriba a la conclusión de que el dictamen número DIC/CRAF-012/03 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Organismo, cumple con los requisitos señalados por el artículo 77 de los Lineamientos Generales que se han mencionado.

Asimismo, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, atendiendo a los razonamientos expresados en el considerando 4 de esta resolución considera que la presentación extemporánea del informe justificatorio con sustento documental efectuada por el Instituto Político de referencia, no es contrario a los fines que persigue la fiscalización de la prerrogativa en comento y que se precisaron en el mencionado considerando.

6.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado resuelve aprobar en sus términos el dictamen materia de este fallo, en atención a que como se señaló en el considerando inmediato anterior, en su contenido consta la correcta ejecución del procedimiento de revisión establecido en los Lineamientos generales para la fiscalización.

7.- Que, en atención a que el Consejo General del Organismo determinó la existencia de observaciones en la revisión de los informes justificatorios del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 53 del Código de la materia, lo



procedente es remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de este fallo, para que en términos de lo dispuesto por el mencionado Ordenamiento Legal, la Autoridad Jurisdiccional en la materia resuelva lo conducente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 91 del Código Comicial vigente se faculta al Consejero Presidente del Consejo General del Organismo para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación correspondiente.

8.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 fracción XXV del Código aplicable, el Consejo General faculta al Consejero Presidente para notificar el contenido de la presente resolución al Partido Acción Nacional, en los términos establecidos por el Proceso Administrativo para la resolución de controversias que se ha citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado

R E S U E L V E

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es competente para conocer y resolver la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-012/03 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante este Organismo Central, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso electoral extraordinario del año dos mil dos, según lo dispuesto por el considerando número 1 de este fallo.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado reconoce la personalidad del Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en términos de lo dispuesto por el punto 2 de considerando de la presente resolución.

TERCERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba en sus términos el dictamen número DIC/CRAF-012/03, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante este Organismo Central, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña del proceso



electoral extraordinario del año dos mil dos, según lo dispuesto por los puntos considerativos números 5 y 6 de este fallo.

CUARTO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo General, para remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el considerando número 7 de este fallo.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos dispuestos en el considerando 8 de esta resolución.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintiséis de marzo de dos mil tres.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

**LIC. ALEJANDRO ARTURO
NECOECHEA GOMEZ**

**MTRO. JOSE ANTONIO
BRETON BETANZOS**